

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL  
MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

<b>PROCESO</b>	<b>ORDINARIO</b>
<b>DEMANDANTES</b>	<b>LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA</b>
<b>DEMANDADOS</b>	<b>COLFONDOS S.A.</b>
<b>VINCULADO</b>	<b>NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>
<b>PROCEDENCIA</b>	<b>JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN</b>
<b>RADICADO</b>	<b>05001 31 05 002 2021 00017 01</b>
<b>SEGUNDA INSTANCIA</b>	<b>APELACIÓN</b>
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	<b>- Garantía de Pensión Mínima – Intereses Moratorios Art. 141 de la Ley 100 de 1993</b>
<b>DECISIÓN</b>	<b>CONFIRMA</b>

**SENTENCIA No. 292**

Medellín, treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°043 de 2023, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN formulado por el apoderado de **COLFONDOS S.A.** contra la Sentencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

**ANTECEDENTES**

El señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **COLFONDOS S.A.**, con el fin de que: **1)** Se declare que tiene derecho a la pensión de vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima, desde el 29 de julio de 2016. **2)** En consecuencia, solicitó condenar a **COLFONDOS S.A.** al pago de la mesada pensional correspondiente desde la fecha en comento. **3)** Así mismo, peticionó el pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 generados desde el 19 de noviembre de 2016, o la indexación de las sumas resultantes.

Como sustento de tales pedimentos expuso que, nació el 23 de diciembre de 1952, alcanzando la edad de 62 años en 2014, motivo por el que decidió adelantar en 2016 la solicitud ante **COLFONDOS S.A.** para el reconocimiento de la pensión de vejez, misma que fue negada por esta entidad tras anotar que los fondos existentes en la cuenta de ahorro

individual no eran suficientes para financiar la prestación, por lo que inició los trámites requeridos para la devolución de saldos, prestación que más adelante le fue desembolsada.

Que el 18 de julio de 2016 la demandada expidió historia laboral omitiendo incluir las cotizaciones efectuadas algunos periodos, *verbigracia*, en 04-1996 y 06-1999, época para la que se encontraba trabajando, ciclos que también aparecen reportados en la historia de COLPENSIONES con la anotación de “TRASLADADO AL RAIS”.

Seguidamente, indicó que, al momento de reconocer la devolución de saldos, no se le hizo claridad en torno a cuáles fueron los periodos tomados en cuenta para tal efecto, razón por la que elevó petición a la AFP el 22 de febrero de 2019 en ese sentido, y de ser el caso, informaran el motivo para no haber incluido los periodos en cita.

En respuesta a lo anterior, la administradora de pensiones emitió varios comunicados, el primero, donde informó haber cancelado por devolución de saldos la suma de \$55.637.845. calculada con base en 885,14 semanas cotizadas. El segundo, en el cual puso de presente que en la cuenta de ahorro individual se hallaba pendiente un mayor valor de \$7.717.518, dineros que fueron entregados efectivamente a su beneficiario.

Posteriormente, señaló que **COLFONDOS S.A.** expidió nueva historia en la que incluyó los periodos atrás mencionados, reflejando un total de 1.123,71 semanas; no obstante, indicó el accionante que dicho reporte contaba con inconsistencias en los siguientes ciclos:

**Tabla #1 (relacion inconsistencias)**

Periodo	Dias cotizados	Dias pendientes
1995/11	23	7
1996/01	28	2
1996/02	25	5
1996/03	0	30
1996/10	0	30
1996/12	0	30
1998/10	0	30
1998/12	10	20
1999/05	26	4
1999/06	15	15
2006/01	0	30
<b>Total:</b>		<b>203</b>
<b>Total semanas:</b>		<b>29,00</b>

Tales periodos, aseguró, no están siendo contabilizados correctamente, los que equivalen a 29 semanas; las que sumadas a las 1.123,71 reportadas en la historia, arrojan un total de 1.152,71 semanas cotizadas durante su vida laboral.

Que en virtud de lo anterior, el 13 de noviembre de 2020 presentó nueva solicitud de reconocimiento de la garantía de pensión mínima, pedimento negado por el fondo demandado, argumentando que no tenía derecho a la pensión de vejez, y que por tanto le había sido entregada la devolución de saldos.

En ese sentido, insistió en el cumplimiento de los requisitos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, teniendo derecho a la prestación en comento desde el año 2016 (Archivo 02 ED).

## POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **COLFONDOS S.A.** se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el demandante solo contaba con 885,14 semanas cotizadas, por lo que no tiene derecho a reconocimiento pensional alguno, máxime que le fue reconocida la devolución de saldos.

Propuso las excepciones que denominó: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; CARENCIA DE DERECHO; FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; BUENA FE; VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD; RATIFICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LA ACTORA AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS ADMINISTRADO POR COLFONDOS S.A.; PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL; IMPOSIBILIDAD DE IMPONER PAGO DE INTERESES MORATORIOS; COMPENSACIÓN y PAGO (...)*” (f. 1 a 13 Archivo 06 ED).

Mediante Auto del 22 de febrero de 2021, el Juzgado de primera instancia dispuso vincular al proceso a la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** (Archivo 07 ED), entidad que procedió a contestar la demanda, oponiéndose a las pretensiones, como quiera que no tiene a su cargo funciones de administradora del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y en tal virtud, no tiene competencia para resolver lo atinente al reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados. Formuló los exceptivos de: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y BUENA FE (...)*” (Archivo 11 ED).

## DEMANDA DE RECONVENCIÓN

Al término del traslado, **COLFONDOS S.A.** formuló demanda de reconvención en contra del señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA**, solicitando: **1)** Que se declare que no procede el reconocimiento de la garantía de pensión mínima en favor del demandado en reconvención, lo que daba lugar a otorgarle la devolución de saldos. **2)** No obstante, que, en el evento de declararse el reconocimiento de la pensión de vejez por virtud de la garantía de pensión mínima, se ordene al citado que reintegre las sumas recibidas por concepto de la devolución de saldos (\$55.637.845 y \$7.890.350). (f. 110 a 112 Archivo 06 ED).

## RESPUESTA DEL DEMANDADO EN RECONVENCIÓN

A través de Auto del 4 de marzo de 2022, se tuvo por no contestada la demanda de reconvención por parte del señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA** (Archivo 28 ED).

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el **JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, mediante Sentencia del 9 de diciembre de 2022, decidió:

“(...) **PRIMERO: DECLARAR** que al señor Luis Alberto Quiróz Chavarriaga, identificado con cédula de ciudadanía No 8.425.037, le asiste el derecho al reconocimiento de pensión

*en modalidad de garantía de pensión mínima a cargo de COLFONDOS S.A, durante 13 mesadas al año a partir del 1 de julio de 2016.*

**SEGUNDO: CONDENAR A COLFONDOS S.A. a cancelar al señor Luis Alberto Quiróz Chavarriaga, identificado con cédula de ciudadanía No 8.425.037 pensión en modalidad de garantía de pensión mínima, desde el 21 de enero de 2018, durante 13 mesadas al año, con un retroactivo pensional calculado hasta el 30 de diciembre de 2022, de \$56.909.558.**

**TERCERO: CONDENAR a COLFONDOS a cancelar intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, sobre las mesadas adeudadas desde el 21 de enero de 2018 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago respectivo.**

**CUARTO: AUTORIZAR la compensación indexada hasta el momento en que se haga el pago respectivo, sobre el retroactivo pensional e intereses moratorios respecto de los pagos por concepto de devolución de saldos realizados al demandante, el 26 de agosto de 2016 por valor de \$55.637.845 y del 6 de septiembre de 2019 por valor de \$7.890.350. Igualmente se autoriza a COLFONDOS para que realice el descuento de aportes en salud correspondiente y se le requiere para adelantar las gestiones necesarias ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para lo de su competencia, dentro del trámite de reconocimiento de garantía de pensión mínima. (...)."**

Para arribar a esta decisión, el Juez de primer grado comenzó por precisar las tesis expuestas por las partes, principalmente por el señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA** y **COLFONDOS S.A.**, pasando a mencionar, de entrada, que, al verificar la historia de aportes del primero, podía evidenciar las inconsistencias enunciadas por el accionante

Frente a ello, resaltó que el actor se trasladó de régimen pensional el 30 de octubre de 1995, afiliándose a **COLFONDOS S.A.**, y al verificar que todos los periodos en discusión se habían generado durante la vinculación del accionante a esta entidad, requirió a la AFP referida a fin de que certificara si para la época de estos ciclos se había reportado novedad de retiro, a lo cual fue renuente esta entidad.

Con base en lo anterior, memoró las exigencias del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario de la garantía de pensión mínima, al igual que las fuentes de financiación de esta prestación, resaltando entre estas que al Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Bonos Pensionales, previa solicitud de la AFP, le corresponde determinar la suficiencia del capital del afiliado para la procedencia del subsidio estatal (Decreto 832 de 1996 y Decreto 4712 de 2008 / Sentencias SL5658-2021). A continuación, expresó que en el evento de determinarse que no tiene derecho a la garantía de pensión, los saldos existentes en la cuenta de ahorro serán objeto de devolución, pero de quedar establecido que procede el otorgamiento de la pensión, esta será vitalicia.

Luego, apuntó conforme a lo explicado por la Jurisprudencia, es viable imponer a la AFP el reconocimiento provisional de la garantía de pensión, cuando las circunstancias de su negativa sean imputables a la entidad de pensiones, con cargo a sus propios recursos. Añadió, que el reconocimiento de indemnizaciones sustitutivas o devoluciones de saldos no puede truncar la obtención del derecho pensional (SL4698-2020 entre otras), eso sí, con la debida compensación de los recursos pagados previamente al afiliado.

A partir de lo anterior, indicó que al revisar la historia laboral del accionante, debía tenerse en cuenta que, como aquel tuvo un cambio de régimen, en ciertos periodos reportó cotizaciones simultáneas en cada uno de estos, al igual que presenta ciclos en los que, pese a no tener reportada novedad de retiro, no se observa cotización o la misma aparece con menos días durante el ciclo, como pasa a detallarse:

PERIODO EMPLEADOR	DÍAS REPORTADOS	DÍAS PENDIENTES
1995/11	23	7
1996/01	28	2
1996/02	25	5
1996/03	0	30
1996/10	0	30
1996/12	0	30
1998/10	0	30
1998/12	10	20
1999/05	26	4
1999/06	15	15
2006/01	0	30

Con base en lo anterior, precisó que, partiendo de las 1.121,85 semanas acreditadas, junto a los periodos no tenidos en cuenta que suman 29 semanas, arroja un total 1.150,86 semanas, escenario en el que expuso, era obligación de **COLFONDOS S.A.** la reconstrucción de la historia laboral del afiliado, más aún cuando los periodos faltantes corresponden a ciclos causados durante la afiliación a esta AFP.

De igual forma, expuso que no quedó acreditada ninguna novedad de retiro para los periodos de 1995 a 2006, siendo deber del fondo de pensiones, conforme el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, ante la existencia de periodos en mora, adelantar las gestiones de cobro en contra de los empleadores incumplidos.

Así entonces, coligió que, al momento de la reclamación pensional, el demandante tenía reunidas las exigencias para la pensión de vejez en la modalidad de garantía mínima, para lo cual contaba la administradora de pensiones con cuatro (4) meses en orden a resolver sobre su reconocimiento, lo que procede desde el 1 de julio de 2016, en cuantía equivalente al SLMLMV y con derecho a 13 mesadas anuales.

No obstante, afirmó que, al no tener certeza sobre la fecha de la reclamación pensional, cabía contar el término para el reconocimiento desde la respuesta a la solicitud, fechada del 29 de julio de 2016. En consecuencia, dispuso el pago de los intereses moratorios desde el 30 de noviembre de 2016.

Ahora, con relación a la excepción de prescripción, indicó que operó frente a las mesadas e intereses causados desde el 21 de enero de 2018 hacia atrás. Así mismo, consideró que al estar probado que el actor recibió el pago de la devolución de saldos, se impone la autorización de la compensación indexada de los valores recibidos, habilitando a la entidad de pensiones para que descuenta también lo correspondiente a aportes en salud, y gestione el reconocimiento de la garantía de pensión mínima.

### RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de **COLFONDOS S.A.** apeló la decisión solicitando su revocatoria, como quiera que, una vez la entidad efectuó el estudio pensional del caso, este le fue informado al reclamante, indicándole que no contaba con el capital necesario para financiar

su pensión de vejez, en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, para seguidamente proceder con el estudio de la garantía de pensión mínima (Art. 65 ibidem); sin embargo, al contar en ese momento con 885 semanas, procedió a reconocer la devolución de saldos, no siendo entonces del caso acceder a las pretensiones de la demanda, más si se tiene en cuenta que el fallador tuvo en cuenta semanas aportadas a COLPENSIONES, entidad que no hizo parte del proceso, punto sobre el que insistió, su representada solo tiene reporte de las semanas indicadas al momento en que rechazó la súplica pensional. Tales argumentos fueron objeto de reiteración, de cara a la condena por intereses moratorios.

Argumentó que, al reconocerse la garantía de pensión, debió el Despacho condenar al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** por tratarse de la entidad encargada de reconocer dicho beneficio. Por último, expresó que también había lugar a imponer condena al demandante, a fin de que reintegrara lo recibido por devolución de saldos. Por último, cuestionó la condena en costas al indicar que su representada obró conforme a la Ley.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término otorgado, el apoderado judicial de **COLFONDOS S.A.** reiteró en esencia lo señalado en la sustentación de la alzada, agregando, por ejemplo, que en lo referente a las semanas reportadas ante COLPENSIONES, en esta administradora solo se reportaron un total de 85,71 semanas válidas para bono pensional, incumpliendo con ello no establecido en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo descrito en los Decretos 1748 de 1995 y 1833 de 2016 (Archivo 03 ED Tribunal).

Por su parte, el mandatario del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** manifestó que no hay fundamento jurídico para que sea esta entidad la encargada de atender las pretensiones de la demanda, en la medida que no está facultada para actuar como administrador de ningún régimen pensional (Archivo 04 ED Tribunal).

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala en el presente asunto, estriba en verificar si resulta procedente imponer a la AFP **COLFONDOS S.A.** el reconocimiento y pago de la garantía de pensión mínima en favor del señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA**, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la ley 100 de 1993, y de acuerdo con la responsabilidad impuesta a la AFP desde la reglamentación legal y trámites administrativos que le corresponde agotar.

En caso positivo, habrá de verificarse la procedencia de los intereses moratorios reconocida en primera instancia, revisándose lo ordenado en torno a la devolución a cargo del actor, de los recursos recibidos por concepto de devolución de saldos.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero reseñar que, en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS, la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y

SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tiene lo siguiente:

- (i) Que el señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA** nació el 23 de diciembre de 1952 como lo muestra la copia del Registro Civil de Nacimiento visible a folios 73 a 74 Archivo 03 ED.
- (ii) Que el demandante estuvo afiliado al RPMPD administrado en su momento por el ISS, trasladándose al RAIS gestionado por **COLFONDOS S.A.**, entidad a la que realizó aportes hasta el ciclo de junio de 2016 (f. 39 a 47 Archivo 03 ED).
- (iii) Que el señor **QUIROZ CHAVARRIAGA** radicó ante **COLFONDOS S.A.**, solicitó de pensión de vejez, recibiendo respuesta en comunicado del 29 de julio de 2016, mediante el cual la AFP le informó que el capital ahorrado en su cuenta de ahorro individual era insuficiente para financiar la pensión de vejez en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, siendo procedente la devolución de saldos (f. 5 a 9 Archivo 03 ED).
- (iv) Posteriormente, el demandante presentó una nueva reclamación de pensión el 13 de noviembre de 2020, a efectos de que la entidad de pensiones efectuara un nuevo estudio, teniendo en cuenta los periodos que registraron inconsistencias en su historia laboral, solicitud resuelta por **COLFONDOS S.A.** en comunicado del 4 de diciembre de 2020, reiterando los argumentos indicados en la negativa inicial (f. 49 a 53 y 59 a 60 Archivo 03 ED).

## DE LA GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA

### ➤ INCONSISTENCIAS HISTORIA LABORAL

Como quedó planteado desde el problema jurídico, pese a que el tema principal es verificar si el demandante tiene derecho a la garantía de pensión mínima, previo a ello debe ahondar la Sala en estudiar las inconsistencias en la historia laboral, enrostradas desde la demanda, datos que a la postre tienen incidencia directa al momento de estudiar la consolidación del derecho pensional.

Frente a ello, el Juez de primer grado resaltó que no había discusión en torno a que el señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA** se encontraba afiliado a la AFP **COLFONDOS S.A.** desde noviembre de 1995, entidad a la que llegó trasladado desde el ISS; no obstante, anotó que, al revisar la relación de aportes obrante en el expediente, encontró que esta presentaba varias anomalías que incidían en el consolidado final de semanas, de cara al estudio pensional.

En ese sentido, al examinarse por parte de la Sala los históricos de cotizaciones arrojados (f. 39 a 47 y 19 a 29 Archivo 03 ED), se encuentran los siguientes periodos sin

aportes, o con cotizaciones deficientes en relación con el número de días reportados por cada empleador:

EMPLEADOR	PERIODO	INCONSISTENCIA
HACIENDA CHINITA Y LA SIERRA	03/1996	Periodo faltante sin novedad de retiro
AGROPECUARIA LOS PLANES	10/1996; 12/1996; 10/1998;	Periodo faltante sin novedad de retiro
AGROPECUARIA LOS PLANES	12/1998	Reporta 30 días, cotiza solo 10
AGROPECUARIA LOS PLANES	05/1999	Reporta 30 días, cotiza solo 26
AGROPECUARIA LOS PLANES	06/1999	Reporta 30 días, cotiza solo 15
MARÍA ISABEL MEJÍA LENZ	01/2006	Periodo faltante sin novedad de retiro

Puestas las cosas de ese modo, y a efectos de sobrepasar este primer escollo, es preciso recordar que por virtud de lo establecido en el artículo **17 de la Ley 100 de 1993**, durante la vigencia de la relación laboral, se erige como una obligación del empleador, efectuar el pago de los aportes correspondientes por sus trabajadores dependientes, compromiso que, de ser incumplido, el mismo compendio normativo sienta en cabeza de la administradora correspondiente el compromiso de adelantar las acciones de cobro pertinentes de cara al recaudo de los aportes dejados de cancelar por el patrono (Arts. 22 a 24 ibidem).

Justamente, el escenario de la mora tiene ocurrencia cuando existiendo la inscripción previa, o afiliación del trabajador al sistema pensional por parte de su empleador, este último incumple su obligación de realizar las correspondientes cotizaciones; caso en el cual, no puede el afiliado soportar los efectos de la actitud renuente respecto del pago por parte del obligado, y debe la entidad de pensiones proceder con las gestiones de cobro, diligencia que de no ser acreditada, daría lugar a contabilizar tales periodos, por la convalidación de la mora.

Tal situación de antaño ha sido abordada por la Jurisprudencia Especializada Laboral, sosteniendo en Sentencia SL1355-2021 que:

*“(…) ante una omisión del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, si junto con ello, existe un incumplimiento de la administradora en el cobro de los aportes dejados de pagar o cuyo pago se encuentra en mora. »sería ésta última quien estaría llamada a asumir el reconocimiento de la pensión a favor de los afiliados o los beneficiarios del afiliado fallecido, pues éstos no pueden verse perjudicados por el retraso o más, concretamente, por la negligencia administrativa de los respectivos fondos en garantizar el pago oportuno a través de las acciones de cobro para cuyo ejercicio se encuentran legalmente facultados (…)”*

De igual forma, en Sentencias SL3277-2021, SL4980-2019 y SL4539-2018 fue rememorada la Sentencia expedida el 22 de julio de 2008 dentro del Rad. 34270, 22 jul. 2008, en la que se razonó:

*“(…) Sobre este punto, la Sala desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270 en la que rectificó su criterio, se ha pronunciado de manera reiterada y pacífica, sosteniendo que el incumplimiento de la administradora de pensiones en su deber legal de cobro al empleador*



*moroso, conduce inexorablemente, a que responda por la prestación reclamada, decisión que se ha rememorado recientemente en la CSJ SL3399-2018, en donde se puntualizó:*

*Sobre la línea jurisprudencial, garantizadora de los derechos de los trabajadores frente a empleadores morosos con el sistema de seguridad social y administradoras de pensiones negligentes en el recaudo de los aportes, la sentencia SL1363-2018 del 11 de abril de 2018, la rememoró así:*

*“Para responder al requerimiento de la censura, ésta Sala de Casación ratifica, que desde la sentencia CSJ SL 22, jul, 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia respecto a los efectos de la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es por ello que a partir de la referida providencia, la Corte estableció que cuando se presente dicha situación, y esto necesariamente impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios.*

*También hizo expresa precisión la Corte, para el caso concreto de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que, si estos han cumplido cabalmente con el deber que les asiste frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que, antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro.”*

*Tal criterio doctrinal se ha reiterado por esta Sala de manera invariable, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839; CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802; CSJ SL8715-2014; CSJ SL14388-2015; CSJ SL15167-2015; CSJ SL16814-2015; CSJ SL14987-2016; CSJ SL17488-2016; CSJ SL13266-2016; CSJ SL2136-2016; CSJ SL15980-2016; CSJ SL4892-2017; y CSJ SL5166-2017, CSJ SL1624-2018 y CSJ SL3550-2018. (...)*”

De lo antelado, se desprende entonces, que para descartar el reconocimiento de derechos pensionales por existir mora en las cotizaciones, no basta con la comprobación que el empleador no efectuó los aportes, aunque estaba obligado hacerlo, sino que debe tener en cuenta la posición asumida por el fondo de pensiones, toda vez que si esta fue activa e hizo uso de los mecanismos legales diseñados para el recaudo de los aportes, no está en la obligación de asumir el pago de aquellas cotizaciones; cosa que no ocurre cuando su actuar fue pasivo y negligente.

Bajo el panorama descrito, en el particular, destaca la Colegiatura, como lo consideró el Juez de instancia, en los términos como aparecen configuradas las circunstancias fácticas del presente asunto, es dable considerar que lo acaecido en el caso del accionante, corresponde el fenómeno de la mora patronal, frente a lo cual debe destacarse que, si bien dentro del plenario no reposan otros medios de prueba relativos a la vigencia de las vinculaciones del demandante con los empleadores anotados, nótese que de las mismas historias laborales auscultadas se puede extraer en cierta medida los extremos de cada una de esas relaciones sostenidas por el actor con HACIENDA CHINITA Y LA SIERRA (06/1995 a 03/1996), AGROPECUARIA LOS PLANES (04/1996 a 06/1999) y MARÍA ISABEL MEJÍA LENZ (06/2003 a 06/2016), aspecto del que, justamente, se extrae que la discusión no está atada a la real existencia de la relación laboral, **sino al pago efectivo de los aportes a cargo de estos.**

Se considera de esa manera, pues la documental muestra que, durante la vigencia de cada una de estas vinculaciones, los ciclos en mora en cada uno de los casos se advierten intermitentes, por periodos cortos, inmersos entre las novedades de ingreso y retiro con los respectivos empleadores; mientras que otros reflejan como inconsistencia, el hecho de haberse pagado menos días de los reportados durante el respectivo ciclo (30 días), esto es, se dio un pago incompleto del periodo por parte del patrono obligado; resaltándose de los ciclos faltantes por completo, que no tiene asidero la descalificación del periodo respectivo, máxime cuando se advierte en el curso de estos, la pervivencia de la relación laboral, imbuidos en el interregno comprendido entre el ingreso y retiro de la empresa, aunado a que no se observa el traslape con registros durante la misma época asociados a otros empleadores, todo lo cual permite avizorar que se trató de periodos efectivamente laborados, con irregularidades en el pago de la cotización.

Ante lo anotado debe acotarse que, el hecho de no centrar el punto de controversia en torno a la existencia o vigencia de la relación laboral con la empleadora mencionada, no contradice el precedente fundado por el Órgano de Cierre de la Justicia Laboral, de cara a la validación de los periodos en mora, por la omisión de la administradora de pensiones en ejecutar las pertinentes acciones de cobro, ello por cuanto como lo dejara sentado el Alto Tribunal en sentencia SL3490-2019: “(...) *la exigencia probatoria de comprobar el vínculo laboral, solo opera en los casos en los que existen dudas fundadas sobre la vigencia del nexo de trabajo, pues no en todos los eventos en los que se examine una historia laboral,» para contabilizar las semanas cotizadas, se requiere verificar la existencia de un vínculo laboral por cada periodo aportado o dejado de cotizar (...)*”.

Y es que, en el actual asunto, no hay lugar a considerar que existen dudas fundadas sobre la existencia de la relación laboral con los empleadores anotados atrás y en los periodos descritos, interregnos dentro de los cuales, sin justificación aparente, los contratantes se sustrajeron de pagar algunos ciclos, y cancelaron de manera deficitaria otros periodos, lo que representó al actor un déficit en su récord de semanas efectivamente acreditadas.

Además, importa anotar que parte de las anomalías halladas corresponden al cruce de información entre el entonces ISS y **COLFONDOS S.A.**, toda vez que, con posterioridad al traslado de régimen, varios patronales continuaron efectuando los aportes en favor del actor al RPMPD, los cuales según certificó **COLPENSIONES** fueron trasladados al fondo administrador del RAIS (f. 67 a 71 Archivo 03 ED). Sobre dicha cuestión, también es pertinente dejar sobre la mesa la actitud renuente de la demandada frente a la información solicitada por el Juez de primera instancia, en torno a que certificara detalladamente los periodos cotizados en favor del actor y los recursos trasladados desde el RPMPD, solicitud que fue desatendida por la requerida.

Con base en lo expuesto, se observa que la demandada hizo recaer en el afiliado los efectos negativos de la actitud reprochable de su empleadora, supuesto que no se ajusta a derecho, por cuanto tiene adoctrinado el Alto Tribunal que: “(...) *las inconsistencias de las historias laborales derivadas de la negligencia de las entidades administradoras, como en la omisión de cobro, recaudo o validación de los respectivos aportes, no pueden afectar a la persona afiliada (...)*” (SL3691-2021).

De ahí que, es plausible la contabilización de las semanas correspondientes a los periodos descritos, en la medida en que dicho déficit de semanas, insiste la Sala, atiende a

tratarse de periodos en mora, hecho que la misma jurisprudencia se ha encargado de precisar, que no puede truncar la consolidación del derecho pensional de la actora, amén que los fondos de pensiones cuentan entre sus obligaciones, con el cobro efectivo de los aportes, acudiendo para ello, de ser necesario, al ejercicio de las acciones legales contempladas en el canon 24 de la Ley 100 de 1993.

Sobre esta última actividad de recaudo, como lo dijo el Juzgador, echa de menos el proceso, la prueba de las gestiones de cobro adelantadas por **COLFONDOS S.A.** con miras a obtener de los patronales incumplidos, el pago de los aportes dejados de cancelar en favor de su trabajador; así como por los pagados deficitariamente, sin que se observe medio suasorio indicativo de las actuaciones adelantadas en este ámbito, y si en virtud de estas, obtuvo resultados favorables, o requirió la declaratoria de “*deuda incobrable*” (SL537-2019).

Hechas las anteriores precisiones en punto a las inconsistencias advertidas en la historia laboral del demandante, equivalentes a 27,01 semanas, las cuales, sumadas a las 1123,71 acreditadas en la historia laboral de **COLFONDOS S.A.** (f. 39 a 47 Archivo 03 ED), arrojan que durante toda su vida laboral, el demandante acredita un total de **1.150,72 semanas**, a partir de las cuales debía efectuarse el estudio del derecho pensional reivindicado.

### **DE LA GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA**

Agotado lo anterior, resáltese que la Ley 100 de 1993 dio un giro total al sistema tradicional que regía en el país en materia pensional, creando el denominado Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, constituido por dos regímenes coexistentes pero excluyentes entre sí. Por un lado, el *Régimen de Prima Media con Prestación Definida* administrado en su momento por el ISS hoy COLPENSIONES, y el *Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad* gestionado por Administradoras de Fondos de Pensiones de origen privado.

En el plano económico, debe resaltarse que en el régimen de prima media el otorgamiento de la pensión de vejez depende del cumplimiento de las condiciones de edad y cotizaciones (Art. 33 Ley 100 de 1993); en tanto que en el RAIS, según lo que interesa al caso objeto de estudio, el reconocimiento de esta prestación obedece al capital acumulado por el afiliado en su cuenta de ahorro principal, conforme lo señalado en el artículo 64 ibidem, que precisa:

*“(…) **Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar. (…)**”*

Vale anotar, que la determinación del capital requerido para la pensión por vejez en este régimen impone, no solo revisar la cuantía los recursos como insumo principal, si no también aspectos como tablas de mortalidad, expectativa de vida del afiliado y beneficiarios, según la reglamentación legal del caso (Resolución No. 1875, derogada por la Resolución 3099

de 2015, a su vez modificada por la Resolución No. 3023 de 2017, todas emanadas del Ministerio de Hacienda), denotando que no hay un monto previamente establecido, y cada caso en particular está atado a circunstancias personales y familiares del afiliado.

En ese orden de ideas, por voces del Artículo 68 de la Ley 100 de 1993, se tiene que la pensión en comento tiene como fuentes de financiación: 1) Los recursos de la cuenta de ahorro individual, conformados específicamente con los aportes obligatorios, voluntarios y sus respectivos rendimientos. 2) El valor de los bonos pensionales, siempre que el afiliado sea beneficiario de estos, y, 3) El “*aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la **garantía de pensión mínima***”.

Bajo ese panorama, en el evento en que el afiliado cuente con el capital necesario, obviamente va a acceder a la pensión de vejez en los términos descritos con antelación. En caso contrario, es decir, de no cumplir con los recursos requeridos, procede determinar si el afiliado puede ser candidato a la garantía de pensión mínima regulada en el Artículo 65 del estatuto de la seguridad social.

En efecto, el citado artículo plantea que para acceder a la garantía de pensión mínima deben acreditarse: a) La edad, que en el caso de los hombres es 62 años. b) El mínimo de 1.150 semanas de cotización, y, c) Que el capital de su cuenta de ahorro individual, incluyendo lo que corresponde por bono pensional, en caso de haber lugar a este (Decreto 832 de 1996), no sea suficiente para financiar la pensión de vejez, conforme el cálculo que realice la entidad de pensiones, ajustada a los reglamentos del Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, es relevante anotar que conforme el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, son las AFP, quienes por cuenta del afiliado y sin costo alguno, deben adelantar todos los trámites necesarios, entre otros, para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima. Dicha garantía, al tenor de lo estipulado el artículo 4° del Decreto 832 de 1996, debe ser reconocida por la Oficina de Bonos Pensionales del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

A su vez, el Artículo 9 ejusdem, modificado por el artículo 2 del Decreto 142 de 2006 determina que, si una AFP advierte que un afiliado reúne los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, pero no puede acceder a una pensión de vejez por insuficiencia de capital en la cuenta de ahorro individual, incluyendo el bono pensional, debe proceder con la cancelación mensual de la respectiva prestación con cargo a la cuenta de ahorro individual. **Frente a ello, la Jurisprudencia Especializada ha decantado que el reconocimiento de la pensión de vejez no puede quedar supeditado al reconocimiento de la garantía estudiada por parte del Ministerio (SL1534-2019 y SL1109-2020).**

Resáltese entonces, que no resulta admisible que la administradora de pensiones exponga como justificante para el no proceder con el reconocimiento de la pensión, la falta de agotamiento de un procedimiento que por Ley le corresponde adelantar, esto en consonancia con el régimen de responsabilidades de esta clase de entes prestadores del servicio público de seguridad social, el cual destaca la Sala, propende por el respeto de una serie de garantías y prerrogativas mínimas que no pueden ser vulneradas.

Frente a ello, precisamente el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 contempla, entre otras cosas, que si la AFP no efectúa una gestión oportuna para la emisión del bono

pensional, u omite presentar la solicitud del reconocimiento de la garantía de pensión mínima por razones imputables a aquella, deberá reconocer al afiliado una pensión provisional, con cargo a sus propios recursos, sin afectar la cuenta de ahorro individual del afiliado, esto sin perjuicio de poder acudir ante la autoridad competente con miras a obtener el reembolso de lo pagado, de llegar a considerar que la tardanza no le es atribuible (SL5701-2021).

Lo expuesto surge en razón a que, desde el mismo ordenamiento, el legislador impone a las AFP un alto estándar de diligencia y cuidado en el manejo y trámite de las historias laborales de sus afiliados, y de sus prestaciones en general, al determinarse que, si por la falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones el afiliado no cuenta con los recursos necesarios para acceder a la pensión, ***“corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos”***. Se evita de esa forma que sean los afiliados quienes sufran las consecuencias de un actuar negligente de las entidades administradoras, por los derechos que involucra el manejo de los recursos del sistema de seguridad social.

Bajo esa premisa, la displicencia y falta de diligencia en trámites a cargo de la AFP, habilitan al fallador judicial a acudir a la pensión provisional que otorga el artículo 21 del decreto 656 de 1994, pues claramente se convierte en una traba administrativa que impide la materialización del derecho para el afiliado, al punto que llegándose el momento de reclamar la pensión de vejez por el asegurado, si este aspecto aún no ha sido decantado, impide que se tenga definido el capital para financiar la pensión, y se hace imposible establecer su monto, e incluso determinar si hay lugar o no al trámite de la garantía descrita, lo que en consecuencia habilita la imposición a la AFP, de asumir el pago de la pensión de vejez de su afiliado y, palmariamente, sin afectar la cuenta de ahorro individual del mismo (CSJ SL2676-2021 y CSJ SL4531-2020).

A partir de todo lo anterior, teniendo en cuenta lo argumentado en el *ítem* anterior, donde la Sala abordó el estudio de la densidad de semanas del señor **QUIROZ CHAVARRIAGA**, cae de su propio peso lo argüido por el apoderado de la AFP demandada en torno a que el demandante, de cara a la garantía de pensión analizada, solo contaba con 885 semanas de cotización, situación que, además de haber sido corregida en sede administrativa por la entidad, que en *relación de aportes* del 8 de julio de 2019 (f. 39 a 47 Archivo 03 ED) indicó que, a corte de junio de 2016, contaba con 1.123,71 semanas; número que según el análisis aquí detallado resultó incrementado a **1.150,72**, previa depuración de las inconsistencias presentadas en el histórico de cotizaciones. Esta cifra, aunada a la edad de 62 años alcanzada por el afiliado el 23 de diciembre de 2014 *-nació 23 de diciembre de 1952 f. 73 a 74 Archivo 03 ED-*, permiten colegir que se encuentran acreditadas por el demandante, las exigencias para acceder a la garantía de pensión mínima en los términos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Tales circunstancias evidencian la incuria de **COLFONDOS S.A.** en su deber legal de reconstruir la historia laboral del afiliado, ejercicio que implicaba, como quedó indicado atrás, adelantar las gestiones de cobro ante los empleadores que presentaban anomalías en el pago de aportes, deber atado igualmente a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, que impone a las administradoras de pensiones el de *“(…) custodiar, conservar y guardar la información de cotizaciones de sus afiliados, así como garantizar un contenido confiable de lo consignado en las historias laborales y la completitud de la mismas (…)”* (SL5339-2021), omisión que a la postre generó otras situaciones problemáticas, como por ejemplo, el hecho

de contabilizar un número inferior de semanas al que realmente correspondía, impidiendo el estudio de la garantía de pensión mínima y trámite del respectivo subsidio ante el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

Todo lo anterior, tiene como consecuencia, como bien lo coligió el Juez de instancia, que **COLFONDOS S.A.** deba asumir el pago de la garantía de pensión mínima de manera provisional, hasta tanto agote el correspondiente trámite frente al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** para obtener el reconocimiento de la caución.

Esgrimido lo anterior, el recurrente plantea que debió vincularse al presente trámite a **COLPENSIONES** en atención a que el estudio de las semanas cotizadas por el accionante incluyó la historia de cotizaciones al RPMPD; no obstante, para la Sala no tiene asidero tal argumento, en la medida que, a decir verdad, el fondo del asunto inmiscuye exclusivamente a **COLFONDOS S.A.** y su responsabilidad en relación con el reconocimiento de la pensión reclamada por su afiliado, por lo que no se cumplen las condiciones del artículo 61 CGP a fin de considerar a dicha entidad como litisconsorte necesario, máxime que, sobre lo aportado por el demandante en su periodo de afiliación al ISS no existe en discusión.

Igual suerte corre lo referente a que debió emitirse orden en contra de **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, pues pese a no desconocer la Sala que, en la modalidad de la garantía de la pensión mínima, juega un papel importante el Estado, como quiera que, desde la misma consagración legal de este beneficio, se impone una obligación de financiación de una parte de los recursos que permitirán al fondo solventar la prestación del afiliado (Art. 65 Ley 100 de 1993), no puede perderse de vista que la reglamentación de los preceptos en cita establece la competencia del trámite y gestión en cabeza de la Administradora de Pensiones.

En efecto, el inciso 2° del artículo 83 de la Ley en comento, precisa que: “(...) **La administradora o la compañía de seguros que tenga a su cargo las pensiones, cualquiera sea la modalidad de pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.** (...)”. En concordancia con ello, el artículo 4° del Decreto 832 de 1996 regla: “(...) **Corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las cuales, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les corresponde adelantar los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.** (...)”.

Bajo ese entendido, no considera la Corporación viable modificar la sentencia de primer grado en este ámbito, por cuanto, además de que el Juzgado dejó a salvo la posibilidad de que **COLFONDOS S.A.** acudiera a la cartera Ministerial con el objetivo de tramitar la garantía en favor del accionante, cumple indicar que, por obvias razones, la AFP no ha adelantado el más mínimo trámite en ese sentido, gestión que depende exclusivamente del interés de referido fondo, de donde pudiera decirse que hubo incumplimiento de parte de la vinculada que mereciera rectificarse o agilizarse a través de lo que se llegara a decidir en este proceso.

De otro lado, en los alegatos el mandatario de la AFP esbozó que el demandante solo cotizó al RPMPD 85,71 semanas, insuficientes para la expedición de bono pensional en los

términos del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, lo que en efecto es cierto; empero, no por esto debe decirse que tales cotizaciones no admitan ser contabilizadas para pensión, puesto que así lo dispone el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, concordado en el Decreto 3798 de 2003, normativas en las que se hace alusión a que, aun cuando el tiempo laborado no de lugar a la generación o inclusión del bono pensional, en todo caso estos servirán para financiar la prestación, debiendo trasladarse a la entidad encargada de reconocer el derecho como tal, actuación que efectivamente agotó **COLPENSIONES** en el particular, conforme se constata del comunicado de folios 67 a 71 Archivo 01 ED.

Es por lo anterior que habrá de confirmarse la decisión de primer grado en cuanto al reconocimiento de la garantía de pensión mínima en favor del señor **LUIS ALBERTO QUIROZ CHAVARRIAGA**, incluyendo la fecha de efectividad y cuantía del derecho, aspectos que no fueron objeto de la alzada.

Luego, de conformidad con el artículo 283 CGP, habrá de actualizarse la condena por mesadas retroactivas causadas entre el 21 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2023, que ascienden a la suma de **\$68.223.103**, suma de la que estará autorizada la AFP accionada para descontar lo correspondiente a aportes para el SGSSS, como bien lo ordenó el fallador de primera instancia.

DESDE	HASTA	MESADAS	VALOR MESADA	RETROACTIVO
21/01/2018	31/12/2018	12,33	\$ 781.242	\$ 9.635.318,00
1/01/2019	31/12/2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508,00
1/01/2020	31/12/2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439,00
1/01/2021	31/12/2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838,00
1/01/2022	31/12/2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000,00
1/01/2023	31/10/2023	10	\$ 1.160.000	\$ 11.600.000,00
TOTAL RETROACTIVO				<b>\$ 68.223.103,00</b>

Frente a los **intereses de mora** reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debe destacar la Sala que los argumentos para su improcedencia fueron, en esencia, los blandidos para cuestionar el reconocimiento pensional, los cuales, al no salir avante, abren paso a confirmar lo decidido en este ámbito.

Además, la Jurisprudencia Especializada Laboral ha definido una serie de situaciones excepcionales consideradas como justificantes para exonerar del pago de estos réditos, citándose a manera de ejemplo lo dicho en la Sentencia SL309-2022, a saber: “(...) **1. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013); 2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016); 3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018; 4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016) y 5. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de**

sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014. (...)”.

Sin embargo, la actitud de la demandada que llevó a negar el otorgamiento de la gracia pensional en favor del demandante no encuadra dentro de ninguna de las situaciones aludidas en el precedente memorado.

Igualmente, se adujo en el recurso que la sentencia omitió pronunciarse en punto a ordenar al demandante que reintegre los recursos reconocidos por **COLFONDOS S.A.** por concepto de devolución de saldos, cuestión que, en sentir de la Sala quedó subsumida a cabalidad con la **compensación** declarada en primera instancia (Art. 1714 Código Civil), por virtud de la cual se autorizó, palabras más palabras menos, al descuento de los recursos a pagar por concepto de pensión, las sumas pagadas anteriormente con ocasión a la citada devolución, incluso debidamente indexados, haciéndose innecesario emitir otra clase de orden frente a este aspecto.

Finalmente, en cuanto al reproche de **COLFONDOS S.A.** respecto de la condena en costas impuesta en primera instancia, considera la Sala que no le asiste razón en lo instado, en tanto debe recordarse que al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 CGP, este concepto tiene naturaleza netamente procesal, y su imposición está atada a las resultas del proceso, puesto que en este momento se define cual extremo de la Litis es acreedor o deudor de las mismas, además que se trató del actor del régimen ahorro individual con solidaridad, por cuyas omisiones debió el accionante acudir a la instancia judicial a hacer efectivos sus derechos de la seguridad social

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado. Las costas de segunda instancia estarán a cargo de **COLFONDOS S.A.**, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a UN (1) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la Sentencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

**SEGUNDO: ACTUALIZAR** conforme lo dispone el artículo 283 del CGP, el retroactivo pensional causado entre el 21 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2023 que asciende **\$68.223.103**

**TERCERO:** Las **COSTAS** en esta instancia a cargo de **COLFONDOS S.A.**, incluyendo como agencias en derecho la suma de UN (1) SMLMV.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA